La Corte Constitucional Colombiana como jurisdicción de la interdisciplinariedad¹

The colombian Constitutional Court as jurisdiction of interdisciplinarity

Ferney Rodríguez-Serpa²
 Carolina Cárdenas Arrieta³
 Giselle de la Torre Soto⁴

Como citar y referenciar: Rodríguez-Serpa, F; Cárdenas, C y de la Torre, G. (2019). La Corte Constitucional Colombiana como jurisdicción de la interdisciplinariedad. En Rodríguez-Serpa, F (Ed). *Dialéctica constitucional* (pp.37-59), Barranquilla, Colombia. Ediciones Universidad Simón Bolívar.

- 1 El presente capítulo de libro, se deriva de los resultados parciales de la tesis doctoral titulada: "Legitimidad democrática de las decisiones judiciales de la corte constitucional colombiana", adelantado en el marco del Programa doctoral en Filosofía con orientación en ciencias políticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León de Monterrey-México. Esta investigación es apoyada y financiada por la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla-Colombia a través del grupo de investigación científica "Derechos humanos, tendencias jurídicas y sociojurídicas contemporáneas y en colaboración con el Grupo de Investigación de ciencias sociales GINCIS de la Corporación Universitaria Corposucre.
- 2 PhD. En Filosofía con Orientación en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León de Monterrey-México; Magíster en Derecho Procesal; Abogado; Sociólogo; Editor de la Revista Justicia de la Universidad Simón Bolívar, Colombia, docente-investigador vinculado al grupo de investigación científica "Derechos humanos, tendencias jurídicas y sociojurídicas contemporáneas" de la Universidad Simón Bolívar, Colombia. *rodriguezserpaabogados@gmail.com* ORCID ID: 0000-0002-8197-7010.
- 3 Magíster en Paz, desarrollo y ciudadanía de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Especialista en Derecho Procesal Civil CECAR, abogada, conciliadora. Directora del Programa de Derecho de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre. Corposucre. *carolina_cardenas@corposucre.edu.co*
- 4 Magíster (c). En Educación de la Corporación Universidad de la Costa; Abogada y socióloga, docente de la Corporación Universidad de la Costa, Barranquilla, Colombia. *gdelator2@cuc.edu.co* ORCID ID: 0000-0001-9707-7976

RESUMEN

La Corte Constitucional Colombia con la carta política de 1991, surge como respuesta a las necesidades que el nuevo país demandó a finales del siglo XX, y las propias del siglo XXI. Ha ello, se suma la idea que el nuevo tribunal constitucional ampare sistemáticamente y amplie los derechos fundamentales históricamente desconocidos a la sociedad colombiana, y con ello, los derechos emergentes que el constituyente en su momento no haya podido prever. No obstante, más allá de su naturaleza jurídica para tutelar derechos, y efectuar un riguroso control de constitucionalidad, la Corte Constitucional en sus diferentes jurisprudencias ha evidenciado una capacidad interdisciplinaria en su jurisdicción, la cual es notoria en disímiles fallos con perspectivas propias de las ciencias políticas, la antropología, la sociología, la economía, entre otras. Se utilizó, un enfoque cualitativo, un método inductivo, y una técnica de investigación de análisis de texto. Como resultados, el capítulo demuestra las diferentes dimensiones interdisciplinarias de la Corte, y se concluye que este tribunal tiene la capacidad no solo para abordar estos temas, también tiene las facultades de salvaguardar la integridad y supremacía constitucional.

Palabras clave: Corte Constitucional, interdisciplinariedad, sociología, antropología, ciencias políticas y economía.

ABSTRACT

The Constitutional Court of Colombia, with its 1991 political charter, emerged in response to the needs that the new country was demanding at the end of the twentieth century, and those of the twenty-first century. In addition, the new constitutional court should systematically protect and extend the fundamental rights historically unknown to Colombian society, and in so doing, the emerging rights which the constituent at the time could not have foreseen. However, beyond its legal nature to protect rights and to carry out a rigorous constitutional review, the Constitutional Court in its various jurisprudence has demonstrated an interdisciplinary capacity in its jurisdiction, which is notorious in dissimilar failures with perspectives proper to the political sciences, anthropology, sociology, economics, among others. A qualitative approach, an inductive method, and a research technique of text analysis were used. As a result, the chapter demonstrates the different interdisciplinary dimensions of the Court, and concludes that this court has the capacity not only to address these issues, also has the power to safeguard constitutional integrity and supremacy.

Keywords: Constitutional Court, interdiction, sociology, anthropology, political sciences and economics.

INTRODUCCIÓN

No hay duda alguna que una de las instituciones sociales con mayor impacto en las entrañas del mundo de la vida (Paladino, 2011) de los mortales han sido los tribunales o cortes constitucionales. Su importancia como se ha dicho radica en su impacto, traducido en la capacidad de los tribunales constitucionales de dirimir diferentes conflictos sociales desde los reclamos de la empleada doméstica hasta resolver problemas relacionados con los animales pasando por temas trascendentales como la eutanasia, la dosis personal, el aborto y recientemente sobre la adopción de niñas y niños por parejas del mismo sexo (Peña, 2006).

En este sentido, asistimos a una de las instituciones jurídicas con el mayor grado de racionalidad para comprender los avatares de la vida social especialmente en aquellos países que han adoptado dicha figura como la gran mayoría de los ubicados en la sistemática del *civil law*, lo cual en esencia es un contrasentido pues la praxis de desarrollo de esta última no descansa en la constitucionalización del derecho, como sí ocurre con la racionalidad jurisprudencial que es más coherente con el *commun law* y los esquemas de precedente judicial y subreglas jurídicas (Jacob, 2016).

Esta aclaración previa de entrada permite entender que el lugar de la corte constitucional a partir del poder conferido a sus magistrados resulta desnaturalizado a la tradición del derecho continental, pero que en todo caso su presencia ya es un hecho a partir de la experiencia que construyen los alemanes desde la Ley Fundamental de Bonn de 1949, (Carbonell, 2008, p.51), la cual se ha constituido en el mayor de los referentes para los tribunales constitucionales de lengua hispana.

Ubicados en el contrasentido del lugar de las cortes constitucionales, surgen ciertas preguntas de carácter epistemológico o de gnoseología que resultan necesarias para comprender la capacidad de respuesta de

este órgano jurisdiccional frente a las demandas sociales. En tal sentido, nos podemos preguntar ¿es legítimo que una institución como la Corte Constitucional este formada por juristas que dirimen problemas que escapan a la sapiencia de su formación académica? En otros términos, ¿las respuestas de la Corte Constitucional colombiana en materia económica, social, antropológica, entre otras distintas a lo estrictamente normativo son razonables?

En relación a lo planteado la respuesta hipotética estriba en que la mayoría de edad en términos kantiano (Filgueiras, 2008) que alcanzan los magistrados de la corte constitucional, les permiten a estos desarrollar una capacidad lógica muy profunda en la cual sus raciocinios posibilitan entrarse en esferas aparentemente vetadas, pero imposibles para la colonización de la jurisprudencia constitucional.

Conforme a ello, el derrotero teleológico de este trabajo busca explicar desde diferentes perspectivas cómo la económica, la sociológica, las ciencias políticas y la antropológica tienen la capacidad de intervención interdisciplinaria de la corte, en los reclamos sociales en materia de derechos humanos y de protección de la constitución, por vía de control de constitucionalidad. Tal análisis vale la pena aclarar que es como se ha dicho de forma interdisciplinaria y no transdisciplinaria.

Para lo anterior, el presente ensayo se divide en dos grandes rutas, en la primera se revisaron los antecedentes de la jurisdicción de la libreta como dijo en su momento Mauro Cappelletti; y en la segunda se adentra a la jurisdicción constitucional como jurisdicción de la interdisciplinariedad.

En esta última los problemas que la corte constitucional en sus 26 años de existencia ha logrado resolver desde diferentes ángulos disciplinares que a la postre se creería que son más que los aquí propuestos, mas sin embargo estimamos como aquellos de mayor impacto jurisprudencial,

como lo son los problemas económicos, los problemas sociológicos, las respuestas antropológicas y los problemas de las ciencias políticas.

1. ANTECEDENTES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Es evidente que el estudio de las instituciones políticas del presente –ineludiblemente–, tiene como objeto ir a la época más brillante de la civilización occidental, con ello se hace referencia a la democrática ateniense donde se dieron formas de revisión jurisdiccional de actos de los poderes públicos, no obstante, su antecedente más cercano se ubica en el siglo XVIII, a la luz del desarrollo sacramental de la ley y en efecto, el derecho (Rodríguez & Ruiz, 2010, p.201). Ya en estos tiempos, se establecen formas razonables de limitación del poder de gobierno, o al poder soberano, quien asumía un carácter predominantemente político o moral, razón esta que hacía de él, la necesidad de sujeción al control que reposaba en el derecho y en nombre de la legalidad (Narváez, 2006).

Por otra parte, con el surgimiento del principio de la división de los poderes basado en las teorizaciones de Locke y de Montesquieu, el límite al poder legislativo fue hallado en la atribución de los diversos poderes soberanos a órganos diversos e independientes, más que en un control judicial de las leyes (Celotto, 2002). En este sentido, a los jueces se les limitó el poder en absoluto, pues recuérdese que en el pasado estos fueron nombrados por los monarcas absolutistas y con posterioridad con la revolución francesa no sería visto con buenos ojos por parte de los revolucionarios atrincherados en la figura del parlamento.

No obstante, el antecedente de mayor impacto de las Cortes constitucionales se adjudica a la sentencia Madison Vs. Marbury de 1803. En aquel momento, no se contemplaba la posibilidad de revisión y control de la constitucionalidad en la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787.

En tal sentido, como suele ocurrir con las contingencias sociales, los hechos que pertenecen al ser de las cosas, escapan al margen del deber ser, de ahí la necesidad de reducir las incertidumbres sociales por el derecho y por supuesto de la sociología a través de la comprensión de los “hechos sociales” (Lorente, 2006, p.4) como diría Max Weber la “acción social” (Lutz, 2010, p.214).

Así las cosas, el hecho concreto se ubica en 1803 cuando la Corte Suprema negando a sí misma una competencia menor, como la de impartir órdenes a la administración, se atribuía un poder mucho mayor: el control de conformidad de las leyes a la Constitución. Surgiendo así el control constitucional de las leyes (Celotto, 2002, p.4).

En este sentido, la Sentencia del juez Marshall en 1803 en el resonado caso *Marbury Vs. Madison*, en aquel tiempo. La Constitución escrita ha sido considerada siempre como Ley Fundamental y Superior de la Nación y consecuentemente la teoría de tales Gobiernos ha de ser que un acto de la legislatura que repugne a la Constitución es nulo, y la necesidad de optar por una de las normas (Constitución/ley) en conflicto: Si una ley está en oposición a la Constitución, si ambas la ley y la Constitución, son aplicables al caso particular, el Tribunal tiene que determinar cuál de estas reglas en conflicto es la que rige el caso. La lógica preeminencia de la Constitución: Si los Tribunales han de observar la Constitución, y la Constitución es superior a cualquier acto ordinario de la legislatura, la Constitución y no tal acto ordinario ha de regir el caso a que ambas se aplican, ya que otra cosa sería subvertir el verdadero fundamento de todas las constituciones escritas (Cerra, 2011, p.168).

Según la aclaración de voto de Calabresi, (1995):

En cierto momento, Estados Unidos tenía casi un monopolio sobre el control constitucional, y si una doctrina o planteamiento no se intentaba acá, no había ningún otro lado donde

buscarla. Esa situación ya no es la misma. Desde la Segunda Guerra Mundial, muchos países han acogido formas de control constitucional, que (a pesar de ser diferentes de la nuestra en múltiples detalles) sin lugar a dudas han tenido su origen e inspiración en la teoría y la práctica constitucionales norteamericanas. Estos países son nuestros ‘descendientes constitucionales,’ y la forma en que han tratado problemas análogos a los nuestros puede resultarnos muy útil cuando confrontamos asuntos constitucionales difíciles. Los padres sabios no dudan en aprender de sus hijos. (Sentencia *United States v. Then*)

El caso *Marbury contra Madison* es un proceso judicial abordado ante la Corte Suprema de los Estados Unidos y resuelto en febrero de 1803. Se considera el caso más importante de la jurisprudencia estadounidense, no por el asunto específico tratado, que no era menor, sino por los principios que estableció. La sentencia afirma la capacidad de los tribunales de realizar control de constitucionalidad, es decir juzgar la conformidad de la ley con la Constitución y para abrogar, inaplicándolas, aquellas que pudieran contravenirla. Este principio instituye la atribución más importante de los tribunales estadounidenses, y hace de ellos los primeros tribunales constitucionales de la historia (Zambrano, 2012).

El caso surgió como resultado de una querrela política a raíz de las elecciones presidenciales de 1800, en las que Thomas Jefferson, demócrata-republicano, derrotó al entonces presidente John Adams, federalista. En los últimos días del gobierno de Adams, el Congreso dominado por los federalistas, estableció una serie de cargos judiciales, entre ellos 42 jueces de paz para el Distrito de Columbia. El Senado confirmó los nombramientos, el presidente los firmó y el secretario de Estado estaba encargado de sellar y entregar las comisiones. En el ajetreo de última hora, el secretario de Estado saliente no entregó las comisiones a cuatro jueces de paz, entre los que se contaba William Marbury (Zambrano, 2012).

El nuevo secretario de Estado del gobierno del presidente Jefferson, James Madison, se negó a entregar las comisiones porque el nuevo gobierno estaba irritado por la maniobra de los federalistas de tratar de asegurarse el control de la judicatura con el nombramiento de miembros de su partido. Marbury recurrió al Tribunal Supremo para que ordenara a Madison entregarle su comisión. Si el Tribunal fallaba a favor de Marbury, Madison todavía podría negarse a entregar la comisión y el Tribunal no tendría manera de hacer cumplir la orden. Si el Tribunal se pronunciaba contra Marbury, se arriesgaba a someter el poder judicial a los jeffersonianos al permitirles negar a Marbury el cargo que podía reclamar legalmente. El presidente del Tribunal Supremo John Marshall resolvió este dilema al decidir que el Tribunal Supremo no estaba facultado para dirimir este caso. Marshall dictaminó que la Sección 13 de la Ley Judicial, que otorgaba al Tribunal estas facultades, era inconstitucional porque ampliaba la jurisdicción original del Tribunal de la jurisdicción definida por la Constitución misma. Al decidir no intervenir en este caso, el Tribunal Supremo aseguró su posición como árbitro final de la ley (Zambrano, 2012, p.7).

En este caso la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos afirmó su control sobre los actos del Congreso al dejar sin efecto aquellos que entran en conflicto con la Constitución. En realidad, el caso *Márbury* no se refiere, como podría parecer, a una cuestión de derechos fundamentales, sino más bien a una de las posibles vías para garantizar –para hacer efectiva– la Constitución. Es decir, *Marbury* trata de un asunto de teoría general de la Constitución (la supremacía constitucional) y de teoría de derecho procesal constitucional (el papel de los jueces ante las leyes inconstitucionales). Para comprender el sentido de la sentencia *Marbury* conviene tener presente el contexto histórico y político en el que el fallo se produce y los múltiples factores que conducen hacia una decisión de tanta trascendencia (Carbonell, 2006, p.289).

Desde otra perspectiva, Beltrán & Gonzalez (2006), aunque son muy críticos inclusive con respecto a la calidad de jurista de John Marshall, expresan que:

sin duda, *Márbury* es la sentencia más citada del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y según unos (por ejemplo, García de Enterría), la más famosa y la más importante de toda la historia. Muchos hemos leído la frase más citada del Chief Justice Marshall, aquella conforme a la cual la obligación de los jueces es 'to say what the law is', determinar qué es el derecho (p. 94)

De otra parte, en el viejo continente, con el mismo fin de ofrecer una garantía de la Constitución de manera objetiva, se confió la revisión de constitucionalidad a un Tribunal, idea tomada del modelo de Kelsen y que también fue tomado por la Constitución austríaca de 1920. En el resto de Europa, superada la Segunda Guerra Mundial, se adoptó de manera decidida, la creación de los tribunales y cortes constitucionales en varios países. En este entendido, Celotto (2002) afirmó:

con la reactivación de la Corte en Austria en 1946 y las previsiones de la Constitución italiana de 1948 y de la ley fundamental alemana de 1949. En Francia el *Conseil constitutionn* previsto por la Constitución de 1958 con funciones limitadas, ha asumido a partir de los años 70 un significativo papel de justicia constitucional; así como sucedió en Bélgica con la Cour d'arbitrage. Experimentos de justicia constitucional centrados sobre una adecuada Corte fueron intentados en Chipre (1960), en Turquía (1961), en Yugoslavia (1963) y, en años más recientes, con el fin de los regímenes dictatoriales, se consolidaron en Portugal (Constitución de 1976 revisada en 1982) y en España (Constitución de 1978) y en un cierto sentido, también en Grecia (1975). La gran parte de los países de la Europa occidental, desde el

fin de los regímenes socialistas, ha iniciado a experimentar la justicia constitucional, a partir de Polonia (1982) y de Hungría (1989). En el último decenio la institución de la Corte constitucional se ha convertido en una variable casi imprescindible en tales sistemas, como se deduce de las Constituciones de Rusia, Bulgaria, Lituania, República Checa, República Eslovaca, Rumania, Eslovenia, Croacia, Albania, Moldavia, Letonia, Estonia, y así sucesivamente. (pp.5-6)

Por su parte Eguiguren (2004), manifiesta que en los países Latinoamericanos se han establecido Tribunales o Cortes Constitucionales, en parte, bajo vestigios del difuso modelo americano y otras tratando de imitar la experiencia de países europeos como Alemania, Italia y España, como es el caso de Guatemala (1965 y 1985), Chile (1970 y 1980), Ecuador (1978), Perú (1979 y 1993), Colombia (1991) y Bolivia (1994) (p.9).

2. LA JURISDICCIÓN DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD

Ahora bien, su caracterización como jurisdicción de la interdisciplinariedad no es gratis, su desarrollo a lo largo de la historia y en el caso colombiano ha llevado a esta corporación a intervenir en asuntos nunca antes pensados, es más con los pronunciamientos de la Corte constitucional se ha diluido las fronteras de la público y lo privado.

Como ya se ha dicho, tal papel de la jurisdicción constitucional ha sido determinado fundamentalmente por el alto nivel de racionalidad de las decisiones judiciales de esta institución. Sin embargo, la racionalidad no es un producto de la nada, es consecuencia de algo más y quizás sustancial para alcanzar tal nivel superior cognitivo de estos tribunales, y con ello me refiero en concreto al nivel de formación de los magistrados de estos tribunales que distan mucho del nivel de formación de los jueces de otros niveles de inferior jerarquía.

En otras palabras, la superioridad racional de juez (Rodríguez, 2011) tiene una estrecha correlación con el nivel de formación de estos. Dado es pertinente para comprender la capacidad metajurídica en materia cognitiva de los juez y en consecuencia las competencias de estos para asumir profundas interpretaciones y la construcción de argumentos interdisciplinarios sólidos, con un alto nivel de erudición .

2.1. La jurisdicción constitucional como respuesta a los problemas económicos de la sociedad colombiana

Quizás una de las más grandes apuestas de la Corte Constitucional colombiana desde su génesis, ha estado vinculada a los problemas económicos, pues la nueva Carta Política representó y representa una eterna tensión para no decir contradicción entre un nuevo modelo de Estado de corte prestacional que asume la carga de la mayor responsabilidad del desarrollo social desde lo público y por otra parte, la entrada en vigencia de un modelo neoliberal que no es más que la flexibilización de la responsabilidad fundamental del Estado y en consecuencia el otorgamiento de un amplio margen de libertad a la iniciativa privada.

En este sentido, “un ejemplo significativo es el primer trabajo de Salomón Kalmanovitz sobre el tema, en donde ese autor intenta un análisis sistemático y comprensivo de la jurisprudencia económica de la Corte, pero se queda en una visión puramente externa de las decisiones del juez constitucional, como lo muestra incluso el propio título de su artículo” (Uprimny, 2001, p.38), que lleva por nombre “Las consecuencias económicas de los fallos de la Corte Constitucional” (Uprimny, 2001, p.38).

Verbigracia de una lectura económica de las decisiones judiciales de la Corte Constitucional colombiana es el recordado fallo de la Sentencia C-700 de 1999. En aquel momento la Corte en la interpretación de Rodrigo Uprimny (2001):

decidió mantener, por algunos meses, el sistema UPAC, a pesar de considerar que era inconstitucional, con el fin de evitar vacíos normativos capaces de generar graves traumatismos económicos. Dijo entonces la Corte que era necesario consagrar un plazo para permitir que la ley establezca las directrices necesarias para la instauración del sistema que haya de sustituir al denominado UPAC, sin que exista un vacío inmediato, por falta de normatividad aplicable⁵. (p. 46)

Ahora el hecho que lo diga la Corte no significa “palabra de Dios”, pues a pesar de la defensa que se hace en este ensayo sobre la capacidad de racionalidad de los magistrados para decidir sobre temas metajurídicos. Para muchas tales invasiones a otras esferas del conocimiento no la ven con buenos ojos. En este caso, para Kalmanovitz (s.f) “fallos, como el del UPAC, no han sido claros, prestándose a varias interpretaciones. La forma como la Corte da pronunciamientos previos a la publicación de los textos de las sentencias revela cierta ansia de figuración ante los medios, induciendo reacciones innecesarias y a veces nocivas frente a temas que se mantienen en la incertidumbre por varias semanas” (p. 4).

En este mismo caso, en posteriores sentencias la Corte Constitucional siguió ampliando sus consideraciones vinculantes, como “la sentencia C-383 de 1999 que señala que la UPAC debía estar atada a la inflación y no a las tasas de interés, y la Sentencia C-747 de 1999, que decretó la inconstitucionalidad de la capitalización de intereses, en los programas

5 Sin embargo, esa prudencia judicial de la Corte Constitucional fue criticada por ciertos comentaristas, e incluso por algunos de los magistrados que aclararon su voto, quienes consideraron que era lógicamente inconsistente, y contrario a sus funciones, que la Corte decidiera mantener en el ordenamiento una disposición que era inconstitucional, por lo cual la sentencia debió declarar su inexequibilidad, sin importar las consecuencias. Como vemos, si la Corte declara la inmediata inconstitucionalidad de una norma económica, entonces se la crítica por no tener en cuenta los efectos de esa decisión; pero si, debido a las consecuencias traumáticas de una inexequibilidad inmediata, la Corte decide mantener temporalmente en el ordenamiento una disposición, que ha constatado que es inconstitucional, se la cuestiona por no cumplir sus funciones de guardiana de la supremacía de la Constitución (Uprimny, 2001, p.46).

de adquisición de vivienda, se fundaron en el principio de adecuación de las políticas económicas” (Uprimny y Rodríguez, *s.f.*).

Continuando con Uprimny (2001), sus palabras son claras en afirmar que es legítimo que se exija de los jueces que hagan una reflexión a fondo sobre las consecuencias de sus providencias, no solo en materia económica, sino en todas aquellas que se podrían derivar de ella. Ahora mucho más cuando en un sistema donde se reconocen ampliamente los derechos económicos y sociales e incluso los clásicos de primera generación en conexidad con los de segunda, se requieren de jueces con cierta insensibilidad por los efectos –financieros o políticas– de sus decisiones, pues implica que existe una autoridad estatal –el Estado hecho juez o Estado jurisdiccional– que estará dispuesta a proteger el equilibrio de ciertos valores y principios, sin importar que su decisión sea impopular o todo lo contrario que cueste mucho al erario público con tal de materializar los fines esenciales del Estado (p.47).

Finalmente, en cuanto a este punto, se ofrece en resumen una pequeña lista de algunos temas que en materia de derecho económico la Corte constitucional ha dirimido:

- » Normas sobre transferencias y Sentencia C-151 de 1995.
- » Impuestos no retroactivos y sentencia sobre bonos forzosos de seguridad. Sentencia C-149 de 1993.
- » Sentencia C-481 de 1999 que declaró inexecutable la expresión “que deberán ser siempre menores a los últimos resultados registrados” del párrafo del artículo 2º de la Ley 31 de 1992, por desconocer la autonomía del Banco de la República.
- » Prohibición de que la ley establezca exenciones a impuestos territoriales. Sentencias C-160 de 2000, C-1333 de 2000 y C-315 de 2004.
- » Inconstitucionalidad del Plan de Desarrollo Sentencia C-557 de 2000 o de la Ley de Regalías Sentencia C-737 de 2001 por vicios de procedimiento en su aprobación.

- » Sentencia C-122 de 1998 que limitó el alcance de la declaratoria de emergencia económica y estableció que los recursos debían ir a los sectores realmente afectados por la crisis financiera: banca pública y cooperativa
- » Noción de gasto social: Sentencia C-317 de 1998 que consideró que el gasto en deporte y recreación no podía ser considerado gasto social y declaró inexecutable la expresión “y constituyen gasto público social” del artículo 4° de la Ley 181 de 1995.
- » Reactivación económica, acuerdos de reestructuración y derechos de adquiridos acreedores. Sentencia C-586 de 2001. Sentencia C-754 de 2004 que declaró inexecutable la reducción del régimen de transición en materia pensional por violar derechos adquiridos
- » Defensiva: Sentencia C-671 de 2002 sobre seguridad social de miembros de la Fuerza Pública y Sentencia C-038 de 2004 sobre reforma laboral. Tutelas sobre el POS y el derecho a la salud en conexidad con el derecho a la vida digna.

2.2. La jurisdicción constitucional como respuesta a los problemas sociológicos

Por su parte hace presencia en la narrativa jurisprudencial el carácter sociológico de la jurisdicción constitucional. En este escenario la jurisprudencia es igualmente inmensa sobre los problemas sociales en un país donde converge un mundo de la vida feudal, con un mundo de la vida postmoderna, es decir, un país donde es posible ver en el semáforo de una esquina un “carro de tracción animal”, al lado de un vehículo inteligente como un “Audi o Mercedes-Benz”.

En esencia, lo dicho es asumido por la magna jurisprudencia de la Corte constitucional colombiana, que ha abordado disimiles temas de la radiografía social colombiana, como es el fenómeno del desplazamiento forzado, el tema del tratamiento penitenciario y carcelario, el

del consumo de sustancia psicoactivas o dosis personal, el aborto, la eutanasia, entre otros. No obstante, una de las instituciones sociales que más llama la atención, es la familia, la cual la Corte en su jurisprudencia le ha dado un tratamiento sociológico que ha resultado vanguardista para la sociedad colombiana.

En tal sentido, desde la sociología se define la familia como una entidad constituida por mínimo tres personas, a través de la consanguinidad o de la afinidad y son sus fines básicos de reproducción social de las costumbres, cultura e identidad social, también inculcar el respeto por la autoridad y las normas de comportamiento social, así como la socialización de roles y modelos de conducta social (Vela, 2015, p.7).

Es claro que para la sociología existen diferentes tipos de familia, sin embargo, hay, vale la pena rescatar dos de ellas vinculadas al derecho, la primera la clásica familia nuclear de Durkheim (Cadenas, 2015, p. 32) propia del ortodoxo modelo de Estado de Derecho y la segunda, la familia de la democracia emocional de Anthony Giddens (Araújo, 2000) relacionada lógicamente con los valores democráticos.

Lo Corte Constitucional colombiana, sin embargo, va más allá de los constructos clásicos de la familia en la sociología y construye de paso nuevas lecturas sociológicas de esta. Observase en este caso, la inclusión de la familia homosexual o del mismo sexo, o incluso la persona en su existencia singular puede ser familia consigo mismo, pues podría por sí solo o sola tener la capacidad de adopción de un niño o niña.

En resumen, como diría Haydée Valencia y otros (2013):

La familia presenta nuevas formas de estructuración de su dinámica fruto del acceso de la mujer al trabajo, competencia laboral, igualdad de género, madresolterismo, parejas por la Internet, hijos criados por sus abuelos, mujeres cabeza

de familia, padres que desempeñan labores en el hogar, por señalar algunos. Los cambios de la familia en este siglo, deja más preguntas que respuestas: ¿qué sucederá con los roles tradicionales de masculinidad, maternidad y paternidad? ¿Cómo enfrentará el “hijo” de una pareja del mismo sexo su falta de especificidad? (p.91).

2.3. La Jurisdicción de constitucional como respuesta antropológica

Otra de las dimensiones de la interdisciplinariedad es la antropología, en esta la Corte Constitucional colombiana asume verdaderamente la capa del modelo de Estado multiétnico y pluralista. Lo más sagrado a lo expresado es la figura de la consulta previa.

Esta figura en Colombia se constituye en una garantía constitucional surgida del reconocimiento de la diversidad cultural, étnica, ambiental y social existente en el territorio nacional, es decir, es una institución con un espíritu antropológico que nace como la esperanza existencial de las minorías étnicas y de los territorios ancestrales, frente a los avatares del desarrollo desenfrenado. Para el caso nuestro, “Colombia está integrada en mayor número por habitantes que desarrollan su estilo de vida a la usanza de la “cultura occidental”, pero también conviven en ella múltiples comunidades humanas que, a pesar de ser minoritarias, conservan su identidad y se mantienen ajenas a las costumbres y hábitos sociales que la mayor parte de la población emplea regularmente” (Cifuentes, Herrera, Mantilla y Carvajal, 2018).

Consciente de la coexistencia étnica y en reconocimiento de los aportes vitales efectuados por estas comunidades a la edificación de la nación -colombiana-, el Constituyente de 1991 incorporó al texto constitucional un conjunto de normas destinadas a la protección de la identidad cultural,

la diversidad étnica, la autonomía territorial, la propiedad colectiva, la autodeterminación y los derechos humanos de estas comunidades. (Cifuentes, Herrera, Mantilla y Carvajal, 2018).

Recuérdese por ejemplo aquel discurso de Lorenzo Muelas en la Asamblea Nacional Constituyente “al hablarle al país en su lengua nativa durante la Asamblea Nacional Constituyente le muestra finalmente al pueblo colombiano que su identidad no es monolítica, hispánica y católica únicamente, sino pluralista” (Arango, 2006, p.33).

Lo cierto en todo caso, es que la intervención de la Corte Constitucional para establecer límites formales y materiales de las múltiples controversias sociales, económicas y culturales han permitido dar orientaciones a las diferentes reclamaciones, las cuales, por supuesto no han sido nada pacíficas, han llevado incluso a la Corte a interpretaciones extensivas y apoyarse en argumentos contramayoritarios para proteger a las minorías, como es en este caso, las étnicas.

En otras palabras, “la jurisprudencia constitucional ha venido diseñando y poniendo en práctica una concepción moderna del Estado en la que el cumplimiento de los deberes sociales del Estado ocupa un lugar central en la reorganización de las instituciones públicas” (Molina, 2007, p.241), de tal suerte, que la Corte Constitucional ha discutido ampliamente la obligatoriedad de la consulta previa, para la protección antropológica de las comunidades indígenas.

2.4. La jurisdicción constitucional como un problema de las ciencias políticas

Por último, no cabe duda que una de las esferas donde hace de igual forma presencia la jurisdicción constitucional es el campo de las ciencias políticas. En esta, las aporías y fricciones políticas desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se han hecho más notorias. Para explicar esto es

preciso recordar en síntesis el objeto clásico de estudio de las ciencias políticas, que es el poder. Ahora, “no se puede afirmar que en la Ciencia Política el objeto de estudio esté claramente delimitado al regirse esta por varios, entre ellos se pueden citar además del poder, el proceso de toma de decisiones o el Estado” (Vanegas, 2010, p.179).

No obstante, para “el derecho constitucional (...) el objeto de estudio de la ciencia política es el poder y no el Estado” (Vanegas, 2010, p.181). De esta forma se observa cómo desde el gobierno Uribe Vélez, la corte Constitucional avaló la primera reelección presidencial y de la misma forma puso fin a la segunda pretensión de prolongación del poder el expresidente en mención y actual senador de la República. En el período de este mismo gobierno la Corte asumió la competencia de control de constitucionalidad del acuerdo de desmovilización de los grupos de autodefensa en Colombia, las llamadas AUC (Molina y Vizcaíno. 2016).

Otro ejemplo reciente ocurrió con el control de constitucionalidad de los acuerdos de La Habana-Cuba, el famoso fast track (Pulido-Ortiz, 2017). En ello se evidencia los intereses políticos inmanentes al poder, donde se configuran alianzas estratégicas para sacar adelante los acuerdos frente a sus enemigos. O la imposición de estos frente al oficialismo, con plena afectación o injerencia en las decisiones de la Corte.

Finalmente, en este punto agregaría un aspecto no menos importante de las ciencias políticas comprendido a partir del desarrollo jurisprudencial, como es el diseño de políticas públicas. Solo para ilustrar lo dicho es suficiente con mirar detalladamente las Sentencias T-043 de 2015 y T-092 de 2015 (Mendiveiso, 2017, p.7).

CONCLUSIÓN

Este trabajo permite acentuar que el control autónomo de la Corte Constitucional obedeció a la necesidad fáctica de dar respuesta a los

profundos errores cometidos por el órgano legislativo, de modo que el origen del control de constitucionalidad no es otorgado, sino circunstancial, de ahí que lo que esta institución ha conseguido ha sido producto sustancialmente de la capacidad profunda de los jueces de justificar racionalmente la proyección o corrección de los equívocos legislativos.

En coherencia con ello, este trabajo permita inferir que la capacidad de los jueces ha posibilitado la comprensión de fenómenos contingentes de la sociedad, lo cual, permite que su ilustración para abordar desde la interdisciplinariedad a lo largo de la historia no es un reconocimiento vacío, es producto del esfuerzo infinito de la hermosa jurisprudencia de estos tribunales constitucionales en el último siglo.

De otra parte, se concluye en este estudio que la Corte Constitucional ha tenido la capacidad infinita de dirimir profundos problemas económicos en Colombia; en este trabajo destacamos el conflicto del UPAC, no obstante, por problemas de tiempo se dejaron de tocar otros temas relevantes que la Corte recientemente ha resultado como el de las madres comunitarias, que al final de cuenta sufrió un revés en lo que inicialmente les había reconocido.

En ese mismo sentido, se describe la negación de algunas tutelas que han solicitado en tratamiento de enfermedades en el exterior, pero por circunstancias derivadas de precedentes a partir de ella, se han negado. Ahora bien, esto significa que la interdisciplinariedad es la capacidad de decidir favorablemente, también tal capacidad permite negar derechos como estos dos últimos casos planteados.

En cuanto a los problemas sociológicos resueltos por la Corte desde la perspectiva de la interdisciplinariedad ha permitido que el tribunal constitucional ponga fin a disímiles sufrimientos y a la comprensión de los problemas más estructurales de la sociedad colombiana. Por ello

en este caso se ha descrito el fenómeno de evolución de la familia en Colombia y con ello ha quedado demostrado cómo la Corte Constitucional desde la interdisciplinariedad no solo comprende los hechos sociales en el entendido de Durkheim, sino que ha facilitado a través de la jurisprudencia vinculante reconocer derechos nunca antes reconocidos en el ordenamiento jurídico colombiano. Es más es cualquier reconocimiento, es el órgano de cierre del ordenamiento y en consecuencia el mejor respaldo de autoridad para legitimar los derechos de los desventajados.

Otras de las conquistas que se reconocen desde la perspectiva de la interdisciplinariedad estriba en la capacidad de resolver problemas antropológicos en la sociedad multiétnica y pluricultural. Con esto habría de señalar que Colombia es uno de los países con mayores progresos de protección jurisprudencial en la protección de las comunidades indígenas, afro, gitanos entre otros grupos con amplio y poco peso antropológico.

Finalmente, la Corte Constitucional colombiana es muy reconocida por su capacidad de intervenir en la solución de problemas políticos, de ahí aquella expresión donde se dice que las cortes por no decir solo la colombiana, realizan en sus funciones activismo judicial. Ciertamente o no, es claro que la capacidad de dirimir un problema político por parte de la Corte deriva como es natural de que la Constitución no es un *corpus* jurídico, también es una Carta esencialmente política, lo cual, desde la condición humana de los magistrados no se debe abandonar aquella expresión aristotélica de que somos animales políticos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arango, R. (2006). *El valor de la coherencia y el precedente constitucional. En interpretar y argumentar. Nuevas perspectivas para el derecho*. 2 ed. Editorial. Medellín.
- Araújo, J. (2000). "Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas" de Anthony Giddens. *Sociológica*, 15(43), 278-282.

- Beltrán, F. y González, G. (2006). Las sentencias básicas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- Calabresí, J. (1995). United States v. Then, 56 F.3d 464, 469 (2d Cir. 1995). Aclaración de voto.
- Cerra, E. (2011). *El control de constitucionalidad. Análisis de la doctrina de la Corte en los 10 años de vigencia de la Corte Constitucional*.
- Cadenas, H. (2015). La familia como sistema social: Conyugalidad y parentalidad. En *Revista MAD*, 33, 29-41. Universidad de Chile,
- Carbonell, M. (2006). Marbury versus Mádison: en los orígenes de la supremacía constitucional y el control de constitucionalidad. *Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional*, p.289.
- Carbonell, M. (2008). Eficacia de la Constitución y derechos sociales: esbozo de algunos problemas. *Estudios Constitucionales*, 6(2), 43-71.
- Celotto, A. (2002). La Corte Constitucional. Círculo doxa. Traducción de Liliana Rivera Rufino. Licenciada en Derecho por la Universidad Contemporánea, Querétaro, México. Disponible en: <http://www.circulodoxa.org/documentos/Circulo%20Doxa%20-%20Formas%20y%20modelos.pdf>
- Cifuentes, G., Herrera, B., Mantilla, L. & Carvajal, P. (2018). La consulta previa en la jurisprudencia constitucional de Colombia: análisis de línea entre 1997-2015. *Revista Justicia*, 23(33).
- Eguiguren, P. (2000). Los tribunales constitucionales en la región Andina: una visión comparativa. Lima, Perú. Disponible en: [Dialnet-LosTribunales-ConstitucionalesEnLaRegionAndina-5084982%20\(1\).pdf](http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=5084982&pagina=1)
- Filgueiras, J. (2008). El Kant de Rorty, o la mayoría de edad de la epistemología *Ideas y Valores*, 57(138), 93-117.
- Jacob, R. (2016). ¿Es el *common law* el mejor sistema jurídico en el mejor de los mundos globalizados posibles? Libres reflexiones sobre los desarrollos de la teoría del derecho y sus desafíos actuales Isonomía. *Revista de Teoría y Filosofía del Derecho*, 44, 11-37
- Lorente, D. (2006). Una relectura del método sociológico: Emile Durkheim y el estudio científico de las formaciones sociales Iberóforum. *Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana*, I(II), 1-9.
- Lutz, B. (2010). La acción social en la teoría sociológica: una aproximación. *Argumentos*, 23(64), 199-218.

- Mendivelso, D. (2017). *Incidencia de la Jurisprudencia Constitucional sobre las Políticas Públicas para los Habitantes de Calle, bajo el Principio de Igualdad y no Discriminación*. Trabajo de Grado, para optar al título de Magíster en Derecho Público, Maestría en Derecho Público, Universidad Konstanz, Universidad Santo Tomás, Bogotá D.C.
- Molina, C. (2007). El rol institucional de la corte constitucional. En *Revista de Derecho, Universidad del Norte*, 28, 213-242.
- Molina, M., y Vizcaíno, V. (2016). Procesos de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en el marco de la Ley de Justicia y Paz en Colombia y los Acuerdos de Paz de Chapultepec en El Salvador. Memorias. *Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe*, 28, 228-262.
- Narváez, J. (2006). Reseña de “El Estado moderno en Europa. Instituciones y derecho” de Maurizio Fioravanti (coord.) *Historia Mexicana*, LV(4), 1519-1527.
- Paladino, F. (2011). Las estructuras del mundo de la vida moderna frente a la globalización. Una lectura desde las sociologías de J. Habermas y A. Giddens *Papeles del CEIC*, 2, pp. 1-37.
- Peña, M. (2006). El precedente constitucional emanado del tribunal constitucional y su impacto en la función legislativa. *Centro de Estudios Constitucionales*, 4(001), 173-184.
- Pulido-Ortiz, F. (2017). La validez de los procedimientos de reforma constitucional fast track *International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional*, 30, 151-183
- Rodríguez, F. y Ruiz, P. (2010). De la crisis del positivismo jurídico al imperio de los principios en el nuevo derecho. En *Revista Republicana*, 9, 199- 215.
- Rodríguez, F. (2011). La racionalidad de la decisión judicial. En *Revista Justicia*, 16(19).
- Uprimny, R. (2001). Legitimidad y conveniencia del control constitucional a la economía. En *Revista Precedente*.
- Uprimny, R. & Rodríguez, C. (s.f). *Debates de coyuntura económico*.
- Vela, A. (2015). Del concepto jurídico de familia en el marco de la jurisprudencia constitucional colombiana: un estudio comparado en América Latina. En: <file:///f:/articulos%20en%20alianza%20estrategica%20para%20publicar/corte%20constitucional/jurisprudencia%20sociologia/del%20concepto%20juridico%20de%20familia.pdf>

- Valencia, H., Cadena, M., Díaz, L., Bedoya, C. y Sánchez, J. (2013). Modificaciones de la estructura jurídica de la familia en Colombia como resultado de las sentencias creadoras de Derecho de la Corte Constitucional. En *Revista Justicia*, 24, 91-104.
- Vanegas, L. (2010). La ciencia política en las ciencias sociales. En: *Revista Reflexiones*, 89(1), 179-183.
- Zambrano, A. (2012). *Marbury vs. Madison y el Control de Constitucionalidad*. Disponible en: http://www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/28102012/dp-marbury_vs_madison.pdf